

UNA MIRADA SINDICAL CONTRACORRIENTE

ÍNDICE

Agradecimientos 13

Prólogo, *Xabi Anza* 15

Introducción 19

I. El contexto 23

El capitalismo regulado de 1945 a 1971: solo un paréntesis con sus luces y sombras 23

Pluralidad política acotada entre la social democracia y la democracia cristiana 23

Intervención del Estado en la economía 28

Crecimiento, empleo, salarios y Estado del bienestar 29

El tiempo del fordismo y de los «partidos hermanos» 31

Aproximaciones convergentes que tratan de caracterizar el modelo 32

Las «expulsiones» 33

La fase del saqueo 38

La contrarrevolución conservadora 38

Desigualdad, pobreza y paro: unos pocos se quedan con casi todo 40

El lobbismo compra la política 42

Control global desde el «menos Estado» 46

El retorno de los malvados Barones Ladrones (The Robber Barons) 47

Todo el poder para los grandes conglomerados empresariales 52

El castigo añadido de la austeridad 53

Despropósito calculado 53

Grecia: un ejemplo paradigmático 58

La tierra en peligro de extinción 64

Cambio climático: las previsiones no pueden ser peores 64

La misma lógica de fondo: explotar la naturaleza como a las personas 65

Una salida más razonable y equitativa 67

Cinco puntos de inflexión 67

Cómo salir de la trampa de euro 69

II. Claves para entender la hegemonía del capital 101

El objetivo prioritario: destruir el sindicalismo 101

Un plan diseñado con detalle y ejecutado sin contemplaciones 101

El caso británico: acabar con sus comunidades y sus resortes organizativos 102

La extensión del Right to Work en EE UU y el riesgo de su implantación en Canadá 106

El caso Alemán: laparoscopia sin resistencia sindical 108

Cada uno a su manera, pero todos en la misma dirección 111

La UE toma el relevo 112

La banalidad del mal y el oficio 113

El ecosistema neoliberal 113

Los economistas neoclásicos 115

Los MBAs 120

Los políticos sistémicos 124

Los periodistas de los grandes medios 125

Los postmodernistas 127

Ni honestos, ni sabios, ni invencibles 129

La acumulación del excedente y la cuestión geográfica 129

La mayor capacidad de maniobra espacial del capital 129

Un poder más centralizado 131

Paso a paso sin perder suelo 132

El particularismo militante como agente colectivo dinamizador 134

Naciones sin Estado y modelo de sociedad 135

III. Oportunidades para el sindicalismo reivindicativo 157

Los amigos intelectuales: pocos pero solventes 157

La pérdida de centralidad dentro de un abanico muy plural 157

El nudo gordiano: el enfrentamiento entre capital y trabajo 160

Los más distantes 162

¿Qué hacer? 163

Desertar del consenso 164

A la deriva 164

Nueva estrategia pero... ¿en qué dirección?	167
La reivindicación para romper el corsé del consenso	169
Sumar fuerzas con otros actores alternativos	170
Moverse poco para no confrontar: respuestas que van de la inoperancia a la insuficiencia	173
Los lastres que mediatizan la reacción sindical	180
El soporte ideológico del inmovilismo	183
IV. El caso vasco: converger para ir más allá del tacticismo e impulsar el soberanismo social	193
Las coordenadas de situación	193
Una expresión del universalismo alternativo	193
Las fuerzas dominantes	194
Un mapa sindical que delimita y potencia su ámbito de implantación	199
Ensayo inédito e inconcluso	201
Un tiempo nuevo	206
El campo de trabajo en común	206
LA: la intemperie como refugio	207
La transición del MLNV	215
LAB: entre dos aguas	219
Ataque en todo regla a la libertad sindical	226
Un proceder que ratifica la deserción nacional del PNV	233
Navarra: pocos cambios	236
Mucha tela que cortar	237
Apurar los resquicios para embocar una estrategia plural alternativa	238
V. A modo de recapitulación: romper el cerco	253
Mirar hacia atrás: aprender de los errores	253
La erosión como tendencia general	256
Tiempos interesantes	258
Un Punto de Vista Contracorriente	261
Bibliografía	267

INTRODUCCIÓN

Este libro es, en gran medida, el resultado de un «acarreo de materiales» que ayudan a comprender la fase actual del capitalismo. Sin embargo, su objetivo va más allá que la caracterización de esa fase. En cuanto militante de ELA pretendo, en primer lugar, apuntar una estrategia sindical capaz de responder a un contexto de clase contra clase, un desafío urgente que atañe al conjunto de las organizaciones trabajadoras. En segundo lugar, quisiera subrayar algunas oportunidades que se abren para el proceso de construcción nacional, subrayando para ello las potencialidades del sindicalismo de contrapoder. Mi motivación última, lógicamente, tiene que ver con la activación eficaz de un soberanismo social que lleve a una nación, Euskal Herria, a configurarse como Estado.¹

Esa activación, creo, será posible si se articula como un proceso organizado de lucha política y social —probablemente largo— que dependerá, en último término, de la solvencia de las alianzas y de su capacidad para alcanzar una correlación de fuerzas que desplace la actual hegemonía. Como toda revolución, «es esperanza en movimiento» (García Linera 2016), soportada en ideas que pueden plasmarse en una agenda movilizadora que vaya marcando los ritmos, las etapas intermedias, en la que nunca se pierda la perspectiva de fondo.

Para avanzar en esa dirección es preciso caracterizar correctamente la fase actual dominada por el capital financiero y que deriva en una desigualdad extrema en el reparto de la riqueza. El paro, los bajos salarios, la precariedad de los empleos, la drástica reducción de las prestaciones y coberturas —sanidad, educación, pensiones públicas y dependencia— alcanzan al conjunto de los países del glo-

bo. En su informe de 2016 titulado *Una economía al servicio del 1%* Oxfam revela que solo 62 personas poseen tanto patrimonio como la mitad de la población mundial (3.600 millones).² Empujados por «una pasión verdaderamente delictiva» (Badiou 2012) que se niega a ceder ni un palmo de lo conquistado, unos pocos persisten en aplicar políticas de austeridad cuando resulta evidente que no sirven para hacer frente a la deuda al tiempo que contribuyen a la destrucción del producto interior bruto. Para consolidar su posición, no dudan en utilizar en su provecho la crisis financiera del 2008 que fue vista casi por todos como un veredicto contra los desmanes de un sistema sin normas, carente de regulación.

¿Por qué esa presunta «ciencia» continua imponiéndose al sentido común? Como señala Blyth (2014) la solidez de su ideología reside en su inmunidad a los datos empíricos: las pruebas contrarias no sirven sino para fortalecerla. Quienes imponen su ley no tienen necesidad de un corpus doctrinal bien elaborado.

El rastro de la desigualdad lleva, inmediata y necesariamente, a la política, entendida esta como el principal instrumento con el que una reducida élite económica impone sus reglas, dejando escasos resquicios a la democracia, convertida en el «dominio *sobre* el pueblo». ³ Con el control adquirido se siente en condiciones de domeñarla e impedir toda resistencia (Bordini 2016). El marco normativo está diseñado para que el mercado funcione, prácticamente, sin restricciones, una vez que se apuesta por el deterioro de lo público, la minimización del Estado del bienestar, y la escalada contra el equilibrio medioambiental.

Esta impronta tiene su correspondiente traducción en el ámbito sindical mediante sucesivas reformas normativas que vacían de contenido su capacidad y atribuciones, muy en particular en lo concerniente a la negociación colectiva. Se busca el exterminio o la total desnaturalización de las organizaciones obreras, para proceder, sin resistencia organizada, a la individualización de toda la biografía laboral —contratación, permanencia flexible y despido—. El achicamiento del recurso a la huelga completa la relación de medidas de quienes se muestran decididos a combatir, sin dar la mínima tregua, a todo colectivo que se resiste a sus planes. Se trata de un escenario crítico para el movimiento sindical, tal vez el más crítico de toda su historia, porque a las dificultades derivadas de verse obligado a

adaptar sus prácticas —asentadas en el pasado en la manufactura— a una economía mayoritariamente de servicios, se le añade la declarada hostilidad del mundo empresarial, fielmente correspondida por las decisiones políticas.

No cabe duda de que los impulsores de esta estrategia son plenamente conscientes de que privándole de capacidad de respuesta en sus ámbitos de intervención más inmediatos se neutraliza, al mismo tiempo, el potencial político de la acción sindical. Si algo han aprendido de la historia del capitalismo es el papel de punta de lanza que han jugado las organizaciones obreras en la lucha por los derechos colectivos de los sectores más castigados.

El libro comenzará recordando, a modo de contraste, la fase precedente del neoliberalismo. El segundo capítulo apunta unas claves que ayuden a explicar la privilegiada posición del capital. Y el tercero pretende señalar el rumbo que debe tomar el sindicalismo alternativo para contribuir a un cambio de escenario. Estos tres primeros capítulos constituyen para mí algo así como una puesta en común para la reflexión de aquellos a quienes preocupa que las organizaciones trabajadoras puedan perder el norte, sin saber qué es lo que está pasando y el por qué, sin haber diseñado una estrategia eficaz en la defensa del salariado.

El cuarto capítulo, mira al ámbito vasco para apuntar, tentativamente, algunos nudos críticos a la hora de operativizar la mayoría sindical vasca, nucleada por ELA y LAB, con el horizonte de una alianza con otras fuerzas sociales y políticas. Quiero dar valor a la eventual convergencia estratégica de ambas organizaciones: su trabajo en común sirvió para desbrozar nuevos caminos; gozan de una importantísima implantación; y despliegan un modelo sindical reivindicativo. La materialización de esa convergencia, en cualquier caso, no está exenta de dificultades ya que ambas organizaciones responden a dos concepciones con orígenes y trayectorias sindicales muy distintas.

La vía que propongo no contempla «Maltzaga» como próximo destino. Este cruce de caminos y centro geográfico de las tres capitales de la CAPV se ha utilizado en nuestro universo político como metáfora para subrayar el trayecto a recorrer conjuntamente por todas las fuerzas abertzales con independencia de sus metas más a largo plazo, ideologías y modelos de sociedad. Creo que en la práctica la

búsqueda de un mínimo común denominador a todas las organizaciones abertzales no solo es estéril, sino que comporta un alto riesgo. Como señalaré más adelante, la inequívoca opción neoliberal del PNV lo aleja de cualquier escenario de suma con fuerzas soberanistas. El partido nacionalista asume, explícita y reiterativamente, que el nivel de autogobierno vendrá determinado por los límites establecidos por el Estado, descartando el recurso de la confrontación.⁴ Siendo esto así, pienso que el proceso independentista solo puede ganar en calado y extensión si prioriza aquellas alianzas que den prioridad a un modelo de sociedad basado en la justicia social y la equidad, un modelo alejado y opuesto al de los sectores económica y política-mente dominantes.

El quinto capítulo es una recapitulación, una síntesis del «Punto de Vista Contracorriente», el guión alternativo de intervención que propongo, sabiendo que eventuales contingencias la irán pautando y enmendando en el futuro.

Notas

1. Un Estado, no entendido como un ámbito que goce de una soberanía plena para dotarse de leyes y políticas, pero que disponga de niveles competenciales similares al resto. Un Estado conocido como «postwestfaliano» por las restricciones que le condicionan y que, en la actualidad, se identifican: en su eventual pertenencia a la UE; y en la globalización neoliberal, caracterizada por el predominio de organismos financieros como el FMI, BM, y OMC y de las empresas multinacionales. Tan simplista como atribuir al Estado actual un poder absoluto en sus asuntos internos es negar su plena vigencia como expresión de un estatus singular, cualificado de mutuo reconocimiento en el concierto internacional.

2. Los datos correspondientes al Estado español concluyen que los veinte más ricos concentran cerca de 115.100 millones de euros, tanto como el 30% más pobre.

3. Bauman (2016) recuerda cómo Canfora advirtió que en la antigua Roma el significado griego de *demokratia* se entendió con esta acepción hasta el punto que el dictador Sila fue considerado como un *demokrator*.

4. El lehendakari Urkullu no pierde ocasión para recordar en qué coordenadas se mueve: «Creo en las soberanías compartidas basadas en el acuerdo, bilateralidad con un sistema de garantías» (Deia 2016).

I. EL CONTEXTO

El capitalismo regulado de 1945 a 1971: solo un paréntesis con sus luces y sombras

Pluralidad política acotada entre la social democracia y la democracia cristiana

La fase precedente a la del neoliberalismo vigente respondió a unas coordenadas políticas, económicas, sociales y sindicales en las que —junto a las constantes inherentes al capitalismo— se observan también rasgos diferenciadores, conformando un sistema que merece la pena diseccionar. Además de caracterizar el modelo, resulta interesante tomar conciencia sobre cómo lo fueron modelando los intereses de clase encontrados, la incidencia de sus estrategias, y lo que dio de sí la correlación de fuerzas en el permanente contencioso capital/trabajo.

En lo político, la victoria militar de los aliados da inicio al periodo conocido como Guerra Fría. Podemos situar en marzo de 1946 el comienzo de esa política de bloques, fecha en la que Churchill manifestó solemnemente en Fulton (Missouri) que «*la amenaza viene del comunismo, como Estado y como movimiento*»¹ (Magri 2010). Esa declaración resume una toma de posición clave —junto con el impacto de la propia guerra— para explicar la estrategia de los países capitalistas más avanzados. El otro bloque, el soviético, replicaría en 1947 poniendo en marcha el *Kominform*,² la unidad política nucleada en torno a una ideología orgánica y codificada, el marxismo-leninismo-estalinismo, del que la historia oficial del PCUS era la síntesis perfecta (Magri 2010).

Las consecuencias de la Guerra Fría en el ámbito occidental que es objeto de nuestro trabajo fueron profundas y duraderas. Kennan,

en *Policy Planning Study* nº 23 de 1948³ señalaba con claridad las prioridades:

Debemos dejar de hablar de objetivos imprecisos e irreales como los derechos humanos, las mejoras en el nivel de vida y la democratización. No está lejos el día en que tendremos que empezar a aplicar conceptos más directos relacionados con el poder. Cuanto menos nos obstaculicen las consignas idealistas, mejor. (Chomsky 2012)

El tiempo ha confirmado, de manera inequívoca, con cuánto celo y falta de escrúpulos se ha llevado a término esta política cuyo verdadero compromiso ha sido la salvaguarda de los intereses de la empresa privada capitalista, en particular de las grandes multinacionales estadounidenses⁴ (Chomsky 2012) y ello en nombre del «libre mercado». El mismo presidente Eisenhower, en su discurso de despedida,⁵ acuñaría la expresión del «complejo militar industrial»⁶ para calificar el peligroso entramado cuyo objeto es poner las bases de este dominio, haciendo prevalecer sus propios intereses y exagerando y manipulando las amenazas exteriores (Harvey 2004). Su consolidación supuso que, en el propio corazón del Imperio, las mayores víctimas del «pánico rojo» acabarían siendo el movimiento obrero norteamericano y las aspiraciones socialdemócratas de los sectores más progresistas de la sociedad. El llamado *New Deal* (nuevo trato) no habría tenido lugar sin esa presión sindical y política.

La ley Taft-Hartley de 1947 exigía que los funcionarios de los sindicatos jurasen no haber tenido relación con ninguna organización filocomunista. Esta norma no tenía más objeto que eliminar a los miembros más combativos de las organizaciones obreras, e introdujo toda una serie de restricciones a la actuación de los sindicatos y al derecho de huelga.⁸ La histeria anticomunista se extendió, por ejemplo, con la utilización de las listas negras, una práctica glorificada por el delator E. Kazan⁹ en la película «*La Ley del silencio*.»¹⁰ A mediados de los años cincuenta, la organización sindical más combativa —CIO, Congress of Industrial Organizations— vio reducido considerablemente el número de militantes lo que la llevó a fusionarse con la AFL (American Federation of Labor) en 1955 para sobrevivir¹¹ (Fontana 2011).

En ese momento, en los EE UU, anticomunismo y nacionalismo se convirtieron en sinónimos. La principal consecuencia fue el ascenso del hasta entonces impopular movimiento «conservador» desplazando al movimiento «liberal». Este, tras dominar el conjunto de la vida intelectual del país y sus instituciones de manera incuestionable durante las dos décadas anteriores,¹² cedería demasiado, y sería la otra gran víctima de la purga «antirroja» (Lukács 2014; Hedges 2015). Harvey (2014) ha sintetizado el impacto, en este corto periodo, de la represión conocida como «macarthismo», subrayando que:

Los sindicatos fueron purgados de influencias radicales, los comunistas y otros partidos de izquierda quedaron proscritos y se intensificó la infiltración por el FBI de cualquier organización opositora. Todo aquello fue legitimado como vital para la seguridad interna de los Estados Unidos frente a la amenaza soviética, generando el conformismo político y la solidaridad interna.

Fontana (2011) realiza una valoración muy similar para resumir lo ocurrido en los EE UU:

Toda la historia de las luchas obreras y las luchas sociales del siglo XX fue eliminada del recuerdo, de modo que el movimiento por los derechos civiles de los años sesenta parecía surgir del vacío [...]. En un sentido general la persecución destruyó en los Estados Unidos las organizaciones de izquierda, debilitó al movimiento de defensa de los derechos civiles, indujo en las ciencias sociales y de la cultura un viraje neutralizador (que comenzó con el olvido del contexto social) y corrompió profundamente a los intelectuales.

El movimiento obrero jamás se repuso del golpe, dejando de ser el núcleo vital de las organizaciones progresistas. La tasa de sindicación alcanzó su máximo histórico en el año 1954 sumando un 34,5% de todos los trabajadores del sector privado (38 % en la industria). En las dos décadas siguientes, hasta la irrupción del neoliberalismo, su disminución fue lenta. En 1962 cayó al 29,8% (33% en la industria). En 1973 rondaba en torno al 27% (Brenner

2009). Los dirigentes más influyentes, por su parte, renunciaron a las ambiciosas metas del pasado, abandonando el impulso de un cambio estructural más profundo de la economía, centrándose en reformas legales de menor calado¹³ (Stone-Kuznick 2015).

En Asia, a partir de 1947, la denominada política de «rumbo inverso» puso fin a los primeros pasos dados hacia la democratización del Japón, eliminando sindicatos y otras fuerzas, para dejar el país en manos de los sectores empresariales que habían apoyado al fascismo nipón. El japonés sería un sistema de poder estatal y privado basado *de facto* en un partido único, el casi invencible Partido Demócrata Liberal, que se aseguraba que el Estado permaneciese apartado de la sociedad civil, todo ello unido a unas estructuras empresariales oligopólicas (Varoufakis 2012). Un modelo que todavía subsiste (Chomsky 2008).

En Europa, al oeste del «telón de acero», algunas «anomalías» democráticas muy explícitas servirían para dejar constancia de lo que en este periodo supuso la política de bloques:

- Dos dictaduras, la salazarista en Portugal y la franquista en España, pudieron prolongar su vigencia hasta bien entrada la década de los setenta.¹⁴ La española consolidaría su estatus en el concierto internacional a partir del pacto suscrito con EE UU en 1953 para la utilización de las bases aéreas ubicadas en su territorio.¹⁵
- Una dictadura militar en Grecia, entre los años 1967 y 1974. Tras la guerra civil de 1945-1946¹⁶ y después de unas elecciones en las que quedó excluida la izquierda se restauró en Grecia, vía referéndum, una monarquía que había patrocinado la dictadura.¹⁷
- En Austria,¹⁸ gobernada desde 1947 a 1966 por una gran coalición de izquierda (socialistas) y de derechas (Partido del Pueblo),¹⁹ se neutralizó todo conflicto, posibilitando que en la gran mayoría de los ámbitos los puestos fuesen cubiertos mediante acuerdo —*Proporz*— (Judt 2012). Se trató, como alguien dijo, de un sistema meticuloso de reparto y duplicación de prebendas.

No vamos a entrar en la evolución específica del resto de los estados de Europa Occidental. Sí recordaremos que en Alemania

los empresarios y altos funcionarios que se habían beneficiado de la ocupación nazi apenas sufrieron perjuicio alguno.²⁰ Por lo demás, en el conjunto de los estados europeos gozaron de amplísima implantación un espacio demócratacristiano reformista y una izquierda parlamentaria que, con sus respectivas adaptaciones,²¹ compartían un principio fundamental, que era el de no llevar las divisiones ideológicas hasta el punto de la polarización y la desestabilización. El nuevo Estado estaba cada vez más separado de cualquier proyecto doctrinal. La política daba paso al gobierno que iba quedando reducido, en la práctica, a tareas administrativas.

En paralelo, las simpatías del grueso de los intelectuales, a partir de la ocupación militar de Budapest, o incluso ya antes, se alejaron radicalmente del bloque soviético. La orientación atlántica de la mayoría de los europeos occidentales ya estaba decidida. No es de extrañar que en 1955, el sociólogo y comentarista político francés Raymond Aron propusiera como tema de debate: «El fin de la era ideológica,» adelantándose en casi en medio siglo al americano Francis Fukuyama que publicaría en 1992 su famoso artículo «*El fin de la historia*».²²

Solo el flanco sur de Europa —con dos estados como Italia y Francia con fuertes partidos comunistas— incorporaba una cierta incertidumbre a este escenario a cubierto de mayores sobresaltos en un marco de democracia parlamentaria liberal. El Partido Comunista Italiano (PCI) fue hasta los años setenta la mayor organización política de masas comprometida en abrir un camino alternativo, simultaneando para ello la búsqueda de reformas parciales y amplias alianzas con difíciles luchas sociales desde una explícita crítica de la sociedad capitalista (Magri 2010). Su respaldo electoral arrancó con un 18,9% en 1946²³ y llegó al 27,2% en 1972, dos años antes del giro político propiciado por su secretario general Enrico Berlinguer, el llamado «Compromiso Histórico», que fijó como prioridad alcanzar acuerdos de gobierno con la Democracia Cristiana. En 1976 el PCI registraría su máximo histórico con un 34,4%. Y en 1979,²⁴ año en el que Thatcher se hizo con el gobierno británico, aún se mantendría en el 30,5%.²⁵

El Partido Comunista Francés (PCF) estuvo más próximo a la órbita soviética hasta bien entrada la década de los setenta, en la que dio el giro eurocomunista. En el primer tramo del periodo su

implantación electoral fue incluso superior al del PCI, cosechando en 1946 un 28,6%, el mejor resultado de su historia. Todavía en 1969, tras el Mayo Francés, alcanzaría el 21%, sacando una clara ventaja al Partido Socialista (PSF). Tras retroceder al 15,3% en las elecciones presidenciales de 1981, su declive fue rápido y acentuado²⁶ (Mischi 2015).

En términos generales, el voto de la clase trabajadora constituía la base de poder e influencia del Partido Laborista británico, los partidos de los trabajadores de Holanda y Bélgica, los partidos comunistas de Francia e Italia y los partidos socialdemócratas de Escandinavia y de la parte Centroeuropea germano parlante.

Intervención del Estado en la economía

Desde el punto de vista económico, el contexto de la Europa occidental de la postguerra estuvo marcado, en su inicio, por una situación dramática. En la primavera de 1947 se tambaleaba al borde del abismo y el poder de atracción del comunismo era real.²⁷ A principios de la década de los cincuenta, una de cada cuatro familias italianas vivía en la pobreza. En 1950, en Alemania Occidental, 17 millones de un total de 47 eran clasificados como «necesitados». En Gran Bretaña el racionamiento de la carne y otros alimentos se mantuvo hasta el verano de 1954.

De no haber sido por El Plan Marshall²⁸ —que se hizo público en junio de 1947— algunos países europeos, incluido Gran Bretaña, habrían tenido verdaderos problemas para conseguir determinados objetivos políticos sin desatar una enorme protesta social. Esta intervención externa de EE UU buscaba obviamente mercados para superar los límites de su demanda efectiva interna, aunque era una opinión generalizada —como resume Schumpeter²⁹— que los métodos capitalistas anteriores a la contienda no eran adecuados y que no había otra alternativa que una fuerte presencia del Estado en el ámbito de la economía.³⁰

El distinto grado de participación del Estado —que en ningún caso fue insignificante— no respondía a una cuestión de orden ideológico. En Escandinavia nunca se puso en cuestión la propiedad y la explotación privada de los medios de producción. En Noruega, tras quince años de gobierno socialdemócrata, el sector de la economía directamente propiedad del Estado o gestionado

por este era menor que en la cristianodemócrata alemana que, a su vez, se mostró menos activa que sus homólogas francesa o italiana. En Gran Bretaña la intervención en la economía fue más directa y los conservadores mantuvieron las nacionalizaciones llevadas a cabo por los laboristas (1945-1951). Determinados objetivos políticos tenían tal prioridad que justificaban una intervención estatal de la máxima firmeza que, en aquellos años, solo se diferenciaba por algunos matices (Honneth 2014).

Este consenso de la postguerra entre la izquierda y la derecha, la ética del estatalismo y del paternalismo, respondía a que, por encima de todo, se consideraba que hacía falta un gobierno activo para conseguir una sociedad estable dentro de lo que algunos han venido a denominar «un capitalismo sin perdedores» (Antón 2015).

Crecimiento, empleo, salarios y Estado del bienestar

Todos los autores coinciden en afirmar que desde finales de la década de los 40 hasta, al menos, mediados de los 60³¹ las economías capitalistas avanzadas experimentaron una expansión económica de proporciones históricas (Brenner 2009). En Europa occidental, este boom se benefició de diversos factores: la acusada escasez de trabajadores que favoreció la entrada de mano de obra abundante y barata; el carbón que, en 1950 representaba el 82% del consumo industrial y doméstico de energía en los seis países que integraban la CECA; y las profundas reformas sociales y tecnológicas.

Sólo diez años después de empezar a salir de los escombros, los europeos entraron en la era de la opulencia. Entre 1950 y 1973, la renta *per cápita* en Europa occidental aumentó a un promedio del 4,1% anual y en Alemania Occidental un 5% (Chang 2015).³² La tasa de paro se situó entre el 1-2%, muy por debajo del 3-4% de los periodos precedentes. En países como Alemania u Holanda, no rebasaba el 1% (Chang 2015). Al mismo tiempo, los salarios aumentaron al ritmo de la productividad, favorecida por una fuerte y rápida inversión orientada a incorporar nuevas tecnologías y a transformar las existentes. Durante las dos décadas siguientes a 1953 los salarios casi se triplicaron en Alemania Occidental y el Benelux. En Italia, su progresión fue incluso superior. En Gran Bretaña se duplicaron.

Como resultado de esta mejora del poder adquisitivo, el consumo se disparó, convirtiéndose en una dinámica esencial de este

periodo, al operar como un estímulo directo para el aumento de la producción que condujo a una expansión de las grandes empresas, caracterizada por la integración vertical y las inversiones a largo plazo (Grant 1996; Sassen 2015). Pero no fue su único impacto de alcance. La revolución provocada por el coche familiar desdibujó, junto con otros productos que se comercializaron en masa como la televisión, el significado cultural de la pertenencia de clase³³ (Judt 2012, Honneth 2014).

Simultáneamente, gracias a la tributación progresiva, a los subsidios del gobierno para los necesitados, a la provisión de servicios sociales y a las garantías contra las situaciones de crisis, las democracias modernas se iban desprendiendo de sus extremos de riqueza y de pobreza. La década de los sesenta representó el apogeo del Estado europeo.³⁴ Ahora bien, el acento social, en el modelo económico no solo se circunscribió a Europa occidental sino que se extendió también a los EE UU donde las grandes reformas sociales vieron la luz de la mano de los demócratas. Disponemos de dos ejemplos bien ilustrativos:³⁵

- El *Fair Deal*, auspiciado por el presidente Truman (1945-1952). Dentro de este programa, en el año 1946, se aprobó una ley de Empleo por la que el gobierno federal asumía el compromiso político del mantenimiento de la plena ocupación (Duménil-Lévy 2014).
- La Great Society³⁶ impulsada por Johnson (1963-1968). La pobreza relativa bajó del 22% al 13% (Varoufakis 2012) y se pusieron en marcha las medidas de ayuda hospitalaria para los ancianos —Medicare— y para los pobres —Medicaid—.

Los mandatos republicanos de los cincuenta, y los sesenta, no revisaron estas orientaciones, sabedores que cualquier persona pública que atacara la idea del impuesto progresivo de la renta se estaba suicidando políticamente³⁷ (Pizzigati 2015). Eisenhower, en una carta de 1954 dirigida a su hermano, llegó a manifestar:

Si algún partido político intentara abolir la seguridad social y el seguro de desempleo, así como eliminar las leyes laborales y los programas agrícolas, jamás volverás a oír a hablar de ese partido

en la historia de la política. Hay un minúsculo grupo escindido que por supuesto cree que puede hacer estas cosas. Entre ellos se encuentra H. L. Hunt (posiblemente conoces su historia), algunos otros millonarios petroleros de Texas y algún que otro político u hombre de negocios de aquí y allá. Su número es insignificantes y son estúpidos (Fontana 2011).

El tiempo del fordismo y de los «partidos hermanos»

El proceso reseñado tuvo como soporte el contrato social —no escrito— entre el trabajo, los negocios y el gobierno. En ese contrato a los sindicatos les correspondía un papel fundamental en la determinación de las condiciones de trabajo. Y el Estado-nación asumía un rol especial haciendo que el fordismo³⁸ fuese mucho más que un mero sistema de producción de masas asociado a un incremento salarial (Harvey 1998; Torres 2015).

En el ámbito de las relaciones laborales las claves de este nuevo marco son explicadas por la Teoría de la Regulación³⁹ que rechaza toda armonía mecanicista preestablecida, así como cualquier fatalismo histórico, dando centralidad a la negociación y al compromiso (Passet 2012). Boyer (1986), uno de sus fundadores, viene a subrayar cómo la conjunción resultante de ajustes económicos, asociados a una configuración dada de las formas institucionales, permitió orientar y canalizar el proceso de acumulación, conteniendo los desequilibrios que el sistema tiende a generar sin descanso. Lo relevante, en este sistema, era el papel referencial que desempeñaba la negociación colectiva, en sus diferentes ámbitos, dentro de un conjunto más amplio de instituciones, convenios y reglas. Esta centralidad de las relaciones capital/trabajo tenía como objetivo desarrollar una demanda efectiva adecuada a la capacidad de producción que, a su vez, estaba parcialmente vinculada con la intensidad y dirección de los cambios tecnológicos introducidos en el proceso de acumulación⁴⁰ (Brenner,-Glick 2003).

Esta práctica que se fue desplegando desde una diversidad de modelos, posibilitó que los sindicatos, con mayores o menores restricciones, bien ideológicas u organizativas, constituyesen una fuerza muy significativa para la democratización y el progreso, canalizando la lucha de los trabajadores por sus derechos. A esta situación, no se había llegado por azar, sino como resultado de una dinámica no